

## **Acceso a datos escolares por padres y familiares. Informe 227/2006**

La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con el acceso a la información de los alumnos que es objeto de tratamiento por parte del centro consultante, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

### **II**

Antes de entrar a analizar las cuestiones planteadas conviene señalar que los datos mencionados en la consulta se encuentran, en todo caso, sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, ya que la misma define en su artículo 3 a) los datos de carácter personal como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

No obstante, es preciso señalar que los citados datos podrán referirse no sólo a los propios alumnos del centro, sino a terceras personas distintas de aquéllos. Así sucedería por ejemplo en lo referente a los datos económicos citados en la consulta, dado que los conceptos facturados podrán referirse al alumno, si bien los datos referidos al efectivo abono de los servicios prestados por el centro podrán referirse al padre o madre que efectivamente procedan a su pago. Esta consideración deberá ser tenida especialmente en cuenta en relación con el ejercicio de los derechos de acceso y con otra serie de cuestiones que se analizarán en un momento posterior.

Por otra parte, deberían diferenciarse los supuestos en que la información es facilitada a la persona a la que aparecen referidos los datos, esto es, al afectado, en los términos definidos en el artículo 3 e) de la Ley Orgánica 15/1999 de aquellos otros en los que el destinatario de la información no es el propio afectado.

En el primero de los supuestos podremos encontrarnos ante un supuesto de ejercicio del derecho de acceso, al que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo apartado primero establece que “El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.

Por su parte, en caso de que el destinatario de los datos no sea el propio afectado nos encontraremos ante una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente

relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante sería posible la cesión sin contar con el consentimiento del interesado en los supuestos contemplados en el artículo 11.2 de la propia Ley.

Por su parte, debe también tenerse en cuenta que algunos de los datos a los que se refiere la consulta se encuentran relacionados con la salud del afectado y, por tanto, tienen la condición de datos especialmente protegidos. Por este motivo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 7.3, según el cual “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Dicho todo lo anterior, procederá ahora dar respuesta a las cuestiones planteadas.

### III

La primera de las cuestiones se refiere a la posibilidad de que los datos mencionados en la consulta puedan ser facilitados a los propio alumnos del centro, aún cuando los mismos sean menores de edad.

En este caso, en lo que se refiera a dato relacionados con el alumno nos encontraremos, como ya se ha dicho ante una forma de ejercicio del derecho de acceso, siendo necesario analizar si dicho derecho podrá ser ejercitado directamente por el menor o si sería precisa la asistencia de su representante legal.

La cuestión planteada ha sido objeto de informe por parte de esta Agencia en reiteradas ocasiones. Si bien la doctrina manifestada en dichos informes venía referida a la posibilidad de que el menor pudiera consentir por sí mismo el tratamiento de sus datos de carácter personal ha de ser igualmente aplicada a los supuestos de ejercicio del derecho de acceso por parte de los menores de edad.

Así, en informe de esta Agencia de 8 de abril de 2004 se indicaba lo siguiente:

*“A nuestro juicio, deben diferenciarse dos supuestos básicos, el primero referido a los mayores de 14 años, a los que la Ley atribuye capacidad para la realización de determinados negocios jurídicos, y el segundo, al consentimiento que pudieran prestar los menores de dicha edad.*

*Respecto de los mayores de catorce años, debe recordarse en primer término, que el artículo 162.1º del Código Civil exceptúa de la*

*representación legal del titular de la patria potestad a “los actos referidos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo”.*

*Se plantea entonces si, en el supuesto de mayores de catorce años, ha de considerarse que el menor tiene condiciones suficientes de madurez para prestar su consentimiento al tratamiento de los datos, debiendo, a nuestro juicio, ser afirmativa la respuesta, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico viene, en diversos casos, a reconocer a los mayores de catorce años la suficiente capacidad de discernimiento y madurez para adoptar por sí solos determinados actos de la vida civil. Baste a estos efectos recordar los supuestos de adquisición de la nacionalidad española por ejercicio del derecho de opción o por residencia, que se efectuará por el mayor de catorce años, asistido de su representante legal, o la capacidad para testar (con la única excepción del testamento ológrafo) prevista en el artículo 662.1 para los mayores de catorce años.*

*Por otra parte, debe recordarse que, según tiene señalado la Dirección General de Registros y del Notariado, en Resolución de 3 de marzo de 1989, “no existe una norma que, de modo expreso, declare su incapacidad para actuar válidamente en el orden civil, norma respecto de la cual habrían de considerarse como excepcionales todas las hipótesis en que se autorizase a aquél para obrar por sí; y no cabe derivar esa incapacidad ni del artículo 322 del Código Civil, en el que se establece el límite de edad a partir del cual se es capaz para todos los actos de la vida civil, ni tampoco de la representación legal que corresponde a los padres o tutores respecto de los hijos menores no emancipados”. En resumen, la minoría de edad no supone una causa de incapacitación (de las reguladas en el artículo 200 del Código Civil), por lo que aquélla habrá de ser analizada en cada caso concreto a los efectos de calificar la suficiencia en la prestación del consentimiento en atención a la trascendencia del acto de disposición y a la madurez del disponente.*

*En consecuencia, a tenor de las normas referidas, cabe considerar que los mayores de catorce años disponen de las condiciones de madurez precisas para consentir, por sí mismos, el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal.*

*Respecto de los restantes menores de edad, no puede ofrecerse una solución claramente favorable a la posibilidad de que por los mismos pueda prestarse el consentimiento al tratamiento, por lo que la referencia deberá buscarse en el artículo 162 1º del Código Civil, tomando en cuenta, fundamentalmente, sus condiciones de madurez.”*

La doctrina contenida en el citado informe es, como se ha indicado, extrapolable al supuesto ahora analizado, dado que el ejercicio del derecho de acceso es una manifestación de un acto referido a derechos de la personalidad. Por tanto, si el menor tuviese más de catorce años será posible facilitarle la información solicitada. En caso contrario habrían de ser atendidas sus condiciones de madurez en atención a los datos que sería objeto de transmisión al mismo.

En todo caso, la transmisión al alumno de los datos debería limitarse a aquellos que se refieran al mismo, dado que en caso contrario se produciría una cesión o comunicación de datos de carácter personal, sin que la misma pueda considerarse amparada en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

#### IV

El resto de las cuestiones planteadas se refiere a la posibilidad de entrega de los datos referidos en la consulta a los padres del menor, así como a otros familiares, planteándose asimismo si es posible la comunicación de los datos a quien no es “titular de la solicitud de matrícula y que hace efectivos los recibos mensuales”.

Como ya se indicó con anterioridad, en el supuesto planteado nos encontraremos, con carácter general, ante una cesión o comunicación de datos de carácter personal, que deberá cumplir lo establecido en el artículo 11 o, en caso de datos de salud, en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999.

Dicho esto, el artículo 154 del Código Civil dispone que “Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre”, añadiendo que “La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades (...) Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”.

En consecuencia, en lo que se refiere a los datos que guarden relación con las funciones de educación y formación establecidas en el citado artículo 154 del Código Civil, existe una norma con rango de Ley que habilita la cesión o comunicación de datos de carácter personal, por lo que la cesión de los datos académicos o psicopedagógicos que guarden directa relación con esos deberes formativos se encontraría amparada en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el artículo 154 del Código Civil.

Al propio tiempo, el artículo 159 del Código Civil establece que “si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad”.

De este modo, en tanto no exista una resolución judicial que excluya del ejercicio de la patria potestad a uno de los progenitores no será posible considerar inaplicable la habilitación que venimos estudiando, por lo que el progenitor seguiría encontrándose habilitado para que le fuesen cedidos los datos.

Por otra parte, como se ha venido indicando, la habilitación se refiere a los titulares de la patria potestad y no a cualesquiera familiares, que únicamente podrían obtener los datos en caso de ejercer la tutela, dado que el artículo 269 del Código Civil establece una habilitación legal similar, al disponer que “El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular (...) a educar al menor y procurarle una formación integral”.

En consecuencia, en relación con los datos relacionados directamente con la educación y formación del menor, y en respuesta a las cuestiones planteadas, debe concluirse que será posible la cesión a cualquiera de los progenitores mientras ejerzan la patria potestad, no pudiendo en ese caso denegarse la cesión por el hecho de que exista separación en tanto no se haya adjudicado la patria potestad en exclusiva a uno de los progenitores. Al propio tiempo, los restantes familiares únicamente podrían acceder a los datos en caso de ostentar la tutela del menor.

## V

En cuanto a los restantes datos mencionados en la consulta, no sería aplicable la excepción planteada.

En particular, en relación con los datos de salud, el acceso a los mismos debería regirse, *a sensu contrario*, por lo expuesto en el apartado II del presente informe, de forma que en caso de que el menor fuera mayor de catorce años el acceso únicamente sería posible si fuese solicitado por el menor o aquél hubiese apoderado al progenitor para ello. Si el menor tuviese menos de catorce años debería estarse a sus condiciones de madurez. Así lo ha señalado la Agencia en informe de 29 de septiembre de 2004.